

Problemas de la transición soviética de la economía planificada a la economía de mercado

Nicolai SHMELIOV

Doctor en Ciencias Económicas. Director Adjunto del Instituto de Estados Unidos y Canadá, Moscú. Diputado

Alexander DEIKIN

Economista, Instituto de Estados Unidos y Canadá, Moscú.

En los últimos años, en nuestro país, se han dado a conocer verdades que en realidad no eran nuevas, pero que, por regla general, habían sido olvidadas. Una de las más importantes es la siguiente: la amenaza que nosotros mismos representamos es tanto mayor cuanto mayores son la tenacidad y la prisa con las que intentamos construir nuestro mundo feliz. ¿Reside la causa de esto en nuestras cualidades, que son fuente tanto de la fuerza como de la debilidad humana, la diversidad humana y lo impredecible de nuestros actos? ¿O es que se manifiestan las «enigmáticas» peculiaridades de nuestro país? Puede extrañar que, en los pasados decenios, nos hayamos tenido que acordar más de una vez de la sencilla verdad que reza que de buenos propósitos está lleno el infierno, pero esto sucede con mayor frecuencia precisamente ahora, cuando la URSS busca su nueva imagen entre los pueblos, su nuevo lugar en la estructura económica mundial.

Ya hace varios meses que se puede decir que en nuestro país están en franca minoría los economistas profesionales, e incluso simplemente personas razonables, que deseen (o se atrevan) a afirmar abiertamente que la economía de mercado no nos sirve, que no es «nuestro» camino, que debemos seguir otras sendas. Los pensamientos y estados de ánimo de las personas han recorrido un camino no sólo grande, sino gigantesco. Esto quedó claro ya durante el verano pasado en los trabajos de la comisión creada por el Gobierno de la Unión con el fin de examinar las variantes alternativas para la transición hacia una economía de mercado regulada (la «Comisión Aganbeguián»). Esta comisión analizó todos los proyectos enviados, y de los casi 90 trabajos recibidos sólo unos pocos no contemplaban el establecimiento de una economía de mercado. Por tanto, cuando el Parlamento ruso, a principios de noviembre de 1990, declaró el inicio de la transición hacia la economía de mercado en la república, contaba con plena aprobación de la mayoría de la población.

Es evidente que esto no significa que el sistema de mercado no tenga detractores, que existen y a veces expresan su punto de vista en voz muy alta. Se puede incluso admitir (ya que la duda acompaña siempre al pensamiento intelectual) que algunos de sus razonamientos contienen elementos razonables. Sin embargo, lo que sucede es que la oposición antimercado no está por ahora en condiciones de presentar propuestas alternativas verdaderamente valiosas y constructivas. Y por esto todos sus argumentos quedan reducidos a la repetición del abecé vulgarizado de la «economía política del socialismo» del reciente pasado (en el mejor de los casos ligeramente modernizado) o, en otros casos, apelan a los sentimientos políticos en defensa de la economía planificada en contrapunto al desenfreno de «los elementos de mercado».

¿Pero, qué es un sistema de mercado? Precisamente en los últimos meses se han puesto de manifiesto las considerables diferencias existentes en nuestro país entre las distintas concepciones, aceptaciones e incluso matices de este término. Según sus conocimientos, desarrollo y experiencia, cada uno espera de las relaciones de mercado algo suyo — mayor o menor— pero que, sin duda, promete mejorar lo que existe. Es seguro que a largo plazo así será. Pero para alcanzar estas futuras mejoras en un país como el nuestro, donde las ideas, costumbres y hábitos de mercado se han ido exterminando con envidiable maestría y tenacidad durante 60 años, tendremos que recorrer un camino de transición que no será corto (cuya duración por ahora se desconoce) y que se podría denominar período de habituación y arraigo. No es razonable esperar avances inmediatos en este camino; al principio, el desarrollo recordará más bien una línea sinusoidal con altibajos.

Esto explica que sean tan enconados los debates en los Parlamentos, tanto ruso como central, y que el Ayuntamiento moscovita, tan decidido en principio, no avance en sus actuaciones reales; y por esta razón se van sucediendo distintos programas de transición a las relaciones de mercado, sin que ninguno de ellos llegue a materializarse. A esto se debe añadir que hay diferencias en el sistema de mercado, por lo menos sobre si puede ser regulado o no. Además, conviene determinar el nivel de regulación deseado (o exigido por las circunstancias) y, para dar este paso, hay que preparar a todo el país; pero, seguramente, no bastará para ello con un pacto general, sino que además se precisará una serie de leyes completamente nuevas y otras disposiciones. Pero hay algo indudable y cuya ausencia provoca no sólo el sentimiento de alerta, sino la sensación de vivir en medio de un tifón económico, cada vez más amenazador: es la necesidad de estabilizar la situación económica en el país. Esta estabilización puede incluirse en el programa de transición al sistema de mercado o puede realizarse previamente, y sólo después se podrá privatizar la propiedad y liberalizar los precios; éste es un problema de segundo plano aunque de no poca importancia. Sin embargo, lo más importante es otra cuestión.

Hoy, cuando de hecho nadie controla la inflación y las tiendas están tan vacías que la simple mención de equilibrar el mercado resulta el colmo de la indecencia, lo que no dejaba lugar a dudas hace un año se ha convertido ahora en un imperativo absoluto: la economía, sea de mercado o planificada, no puede desarrollarse, ni siquiera simplemente funcionar, mientras no se supere el derrumbamiento cada vez más acentuado de nuestro sistema monetario-financiero y mientras no se ponga freno a la actividad de la máquina de imprimir moneda que, por lo visto, produce todo el dinero

que necesita el Gobierno (el cual, además, da la impresión de no tener muy claro el grado de estas «necesidades»).

Ante todo, preguntémosnos: ¿qué nos ha conducido a esta situación?

En el análisis retrospectivo de los últimos 40 años, incluso de todos los 60 años, se evidencian claramente los errores relacionados con una política presupuestaria y tributaria irracional, con la interminable cadena de decisiones equivocadas en la industria y agricultura, y con muchos otros hechos, fruto del sistema dirigista de administración y de la poca profesionalidad de muchos de sus dirigentes al más alto nivel. El «período de estancamiento», a saber los últimos 20 años antes de iniciarse la *perestroika*, ha agravado los rasgos negativos de nuestros procesos económicos. También han representado un coste económico muy elevado la catástrofe de Chernóbyl, el terremoto de Armenia y los movimientos migratorios de refugiados, provocados por una serie de problemas nacionalistas. Pero tampoco se puede ignorar que el ritmo de la desintegración económica ha empezado a acelerarse fatalmente ya después del año 1985. Tomemos como ejemplo nuestro presupuesto estatal, el cual, al abarcar más de 2/3 de la renta nacional, puede servir —a diferencia de los países del Este— no de simple ilustración, sino de índice general sintetizado del estado cualitativo de la economía del país. En 1989 el déficit presupuestario se calculó en 120.000 millones de rublos —una cuarta parte de todos los gastos—, en 1991 el déficit puede alcanzar, según diferentes estimaciones ¡de 120.000 a 330.000 millones de rublos! En estas condiciones sólo medidas auténticamente draconianas (sería deseable que su firmeza se combinase con la racionalidad y la prudencia) podrán reducir este déficit hasta el nivel de 60.000 millones de rublos, que el plan parece haber retenido por ser más «aceptable».

En cambio, durante los años de estancamiento de 1970-1985, el déficit presupuestario por término medio no sobrepasaba los 20.000 millones de rublos al año.

Esto quiere decir que, en los últimos años, el desarrollo económico ha adquirido una nueva particularidad que no puede explicarse sólo con «la pesada herencia del pasado». Pero para poder corregir nuestros nuevos errores es preciso ante todo reconocerlos y admitirlos, lo que, sin embargo, no todos quieren (ni pueden) hacer.

Se pueden indicar cuatro errores de carácter netamente económico que en el último lustro han minado nuestro presupuesto, han desbaratado el mercado de consumo y han elevado drásticamente el ritmo inflacionario. Es evidente que estas acciones pueden denominarse «errores» sólo condicionalmente, ya que en cada

una de ellas se evidencia claramente la premeditada «mano» del aparato administrativo y del partido. En primer lugar, citemos las acciones encaminadas a prohibir la venta de bebidas alcohólicas. La medida no carecía de buena intención, pero era del todo inadecuada desde el punto de vista económico y resultó ser uno de los casos (como lo hubiese podido ver cualquier profesional competente) al que se puede aplicar el proverbio «de buenas intenciones está lleno el infierno». Las buenas intenciones asestaron un golpe al equilibrio del mercado de consumo y, por consecuencia, al balance del presupuesto estatal en cantidad de varias decenas de billones de rublos al año, sin contrarrestar este golpe con alguna otra medida (a pesar de que el Gobierno, al principio, albergaba también algunas medidas bien intencionadas). La segunda acción muy perjudicial para la economía fue la corta pero muy dolorosa campaña de 1986 encaminada a luchar contra los denominados «ingresos no laborales», que golpeó simultáneamente a la agricultura, el mercado de consumo, el sistema de abastecimiento de productos alimenticios y algunos servicios, aplastando al mismo tiempo, como una pesada losa, los tímidos brotes de iniciativa privada, ya casi olvidada en el país. El tercer error radica en el tipo de reestructuración que se hizo en nuestras importaciones, como resultado de su obligada reducción al descender los precios mundiales del petróleo. El Gobierno redujo, no la importación de cereales o maquinaria para la industria pesada (cuya utilización en ambos casos es muy poco rentable en la economía), sino la de productos de amplio consumo, importación que proporcionaba a la tesorería un beneficio comparable por su volumen al aportado por el comercio con bebidas alcohólicas. Y así llegamos al último error, el más doloroso y, quizás, el más enigmático por su procedencia, ya que resulta imposible hallarle una explicación razonable. Para 1988 el déficit presupuestario se acercaba a los 60.000 millones de rublos (aproximadamente el 7 % del PNB del país), en cambio para 1989 se planificó elevar esta suma hasta los 120.000 millones de rublos. Al mismo tiempo se planificó aumentar las inversiones en una serie de ministerios de la industria y la construcción. Surgen dos preguntas. En primer lugar, ¿de dónde se esperaba el Gobierno obtener estos medios? No podía prever un flujo real de ingresos; esto significa que pensaba en la impresión de dinero y en préstamos forzosos procedentes de los ahorros de la población. En otras palabras, se daba un paso consciente y declarado hacia la inflación. En segundo lugar, ¿a qué iba destinado el crecimiento de inversiones planificado, si tenemos en cuenta que éste, según estimaciones, sobrepasa el 30 % del PNB, mientras que una economía normal puede «digerir» no más del 15-20 % (como, por ejemplo, en EEUU)? Quiere decir que la

inflación «se conseguía» además mediante el incremento consciente de las sumas de dinero estatal, así como de los recursos naturales, de energía y mano de obra. Al mismo tiempo, las tentativas (más bien intenciones), ampliamente proclamadas en más de una ocasión, de incrementar la producción de productos de amplio consumo, que llenaría las tiendas y aumentaría sustancialmente los ingresos estatales, nunca pasaron de ser las buenas intenciones de turno. El resultado de todo ello es una inflación ya casi incontrolable y un enorme déficit del presupuesto estatal (agravado por la total inexistencia de reservas para cubrirlo).

Medios para prevenir el desmoronamiento de la economía soviética

La profunda crisis de la economía soviética, que se hubiera podido evitar hace tan sólo un año, hoy ya es un hecho. El racionamiento, en todo el territorio, de un conjunto más o menos amplio de productos alimenticios y otros productos de consumo, la acelerada desintegración del mercado de consumo, la drástica y creciente devaluación del rublo, el florecimiento de la «economía sumergida» y, como resultado de todo esto, las incontrolables consecuencias sociales (y políticas), conducen a que, dentro de poco, pueden dejar de tener sentido real conceptos tales como autogestión, autofinanciación, mecanismos de mercado o fortalecimiento de los estímulos económicos en el trabajo. Y cuando el rublo deje de funcionar en las esferas de producción y de consumo, nos podemos encontrar en el trance de no tener otra alternativa que la de regresar al sistema dirigista de economía. Y este retroceso sería tanto más prolongado cuanto más profundas fueran las consecuencias políticas y sociales de esta crisis.

Ya en 1989 resultaba bastante dudoso que los dirigentes del país percibiesen con suficiente claridad la seriedad de los procesos negativos que se estaban desarrollando. Hoy, parece que ya se dan cuenta, pero esto no se refleja en la valoración que hace el Gobierno de las dimensiones reales del peligro que nos amenaza y, lo que es más importante, de la esencia de los problemas que tiene planteados el país. Esto se evidencia en los dos programas de medidas económicas «excepcionales», que presentó el Gobierno de la URSS primero en septiembre de 1989 y después a finales de mayo de 1990. Tanto en uno como en el otro se vislumbra claramente la intención de resolver el problema mediante la intervención en la esfera de servicios, mientras que las raíces del mismo están en la esfera productiva. Es más, el Gobierno central aún no ha abandonado los intentos de equilibrar el crecimiento de los ingresos

monetarios de la población y las empresas con el aumento de la masa de mercancías en el mercado, cuando ya hace tiempo que el mercado se ha desintegrado y lo que se debería intentar equilibrar es la totalidad de la masa monetaria en el país con toda la oferta de mercancías. La suma del «excedente monetario» en manos de la población y de las empresas sobrepasa por valor de 500.000 millones de rublos la posible oferta (un «excedente», por cierto, equiparable aproximadamente al presupuesto anual de la Unión, y existen estimaciones mucho más elevadas de dicha suma); se produce un desfase entre, por una parte, la estructura de la demanda corriente y la aplazada y, por otro, la estructura de la oferta de mercancías actual y la potencialmente posible en las condiciones actuales; la fiebre compradora que se ha desatado multiplica artificialmente la demanda, muy por encima del nivel normal; la situación en 1990 en el acopio de productos agrícolas es casi catastrófica. Todo esto, más que en ninguna otra ocasión, indica que el problema principal es la necesidad de neutralizar el dinero existente en el país (y no dejarlo crecer durante el año), y ello independientemente de los planes de transición hacia una economía de mercado, como de los plazos y posibilidades de su realización.

Lamentablemente, el Gobierno ha ignorado casi por completo esta tarea en sus proyectos; es más, las medidas propuestas para 1990 hubiesen sido claramente insuficientes incluso para cubrir el aumento programado de los ingresos monetarios de la población, teniendo en cuenta el ritmo de inflación, la nueva emisión de dinero y el déficit presupuestario de 60.000 millones de rublos para 1990; y, sin embargo, ni siquiera estas medidas evidentemente insuficientes se cumplieron. En cambio, se ha aplicado una rígida política tributaria de contención sobre el crecimiento de los salarios y otros ingresos monetarios, lo que de hecho ha significado eliminar el único estímulo existente para trabajar a conciencia y con iniciativa (y por consiguiente más productivamente). Al mismo tiempo surgió la amenaza real de un drástico aumento del paro (centenares de miles o millones de personas), debido a la anulación de algunos programas de inversiones, la reestructuración de la industria, reducción del ejército y conversión de la industria bélica (de momento dejaremos de lado el aumento del paro como consecuencia de la futura transición hacia relaciones de mercado). Y precisamente en este momento se hizo todo lo posible para estrangular el naciente sector cooperativista, de modo que por ahora no cabe esperar de él ni una mejora en el abastecimiento del mercado de consumo, ni nuevos puestos de trabajo, cuando este sector, por sí solo, hubiera podido solucionar el problema del crecimiento de los ingresos monetarios de la población. Al ceder ante los prejuicios de las masas, premeditadamente alentadas por los actos

miopes de nuestros ignorantes burócratas, hemos sacrificado uno de los factores más efectivos a largo plazo en el saneamiento de nuestra economía.

Hoy ya no tenemos el tiempo necesario para corregir la situación; éste se agotó, seguramente, hacia finales del verano de 1990. La situación en el mercado de consumo de Moscú y Leningrado (que está algo mejor en algunas otras regiones del país) indica con especial claridad la acelerada descomposición del mercado, el hundimiento del sistema monetario y de las estructuras de gestión económica. Tanto más difícil resulta la tarea que, tarde o temprano, se tendrá que resolver ineludiblemente: prevenir la total bancarrota, restableciendo el equilibrio en el mercado y consiguiendo que el rublo funcione, ya que sólo después de esto será posible la reforma económica de la envergadura que nos planteamos. Se trata de una serie de medidas extraordinarias y en diferentes campos. Desde el punto de vista puramente técnico, nos podemos imaginar tres variantes fundamentales de esta política económica extraordinaria y las correspondientes medidas prácticas.

Primera variante: Drástica subida de los precios al consumo y substancial depreciación de los ahorros monetarios de la población

Esta variante, por lo visto, puede contemplarse sólo teóricamente: en primer lugar, no daría en plena medida el resultado (financiero) deseado; en segundo lugar, el país no soportaría esta política, dada la tensión social existente y el estado de ánimo de la población; en tercer lugar, hoy por hoy, resulta irrealizable debido a que varias repúblicas han declarado su soberanía política y económica y, por consiguiente, se niegan a seguir las decisiones e indicaciones del poder central.

Lo máximo que se podría conseguir con esta elevación de precios, sería liquidar de un golpe el déficit presupuestario del año y poder renunciar a la emisión de dinero. Pero permanecería el problema, de mucho mayor peso, de la demanda aplazada y las reservas monetarias de la población, así como la necesidad de aminorar el pánico adquisitivo. Si a esto añadimos la anulación de las subvenciones monetarias para la alimentación, transporte, vivienda y servicios comunales, se podría, al parecer, neutralizar adicionalmente un máximo de 50.000 millones de rublos de los más de 500.000 millones que tiene la población en las cajas de ahorro y en el «calceín».

El Estado podría obtener además cerca de 33.000 millones de rublos al suprimir las subvenciones, que no resultan efectivas, destinadas a los precios de compra de los productos agrarios a las empresas no rentables. Esto podría tener algún sentido, aunque sólo sea porque el 80 % de la producción agraria comercializada

del país proviene del 30 % de haciendas (y que son precisamente las que, en la mayoría de los casos, no reciben subvenciones estatales). Sin embargo, éste es un problema muy difícil en el plano político, como lo confirma el solo hecho de que, a mediados de 1990, el Gobierno decidiera subir los precios de compra de los productos agrarios, lo que lógicamente significa un aumento del futuro déficit presupuestario previsto. Además se plantea el problema de qué hacer con las haciendas que realmente resultan deficitarias. ¿Liquidarlas y entregar la tierra a los granjeros? Pero el proceso de formación de granjas está resultando muy lento, por varios motivos. Todo parece indicar que el país aún no está preparado para este cambio.

En resumen, resulta evidente que la primera variante se debe rechazar por irreal y poco efectiva.

Segunda variante: Realizar la reforma monetaria y confiscar los ahorros de la población

Si analizamos la historia, podemos ver que cuando los canales de circulación fiduciaria alcanzan el grado de saturación actual, los gobiernos siempre han recurrido a la confiscación de los ahorros de la población. Son ejemplos del pasado cercano la reforma monetaria de 1947 en la URSS y la de 1948 en Alemania Occidental. Sin embargo, estamos viviendo unas condiciones políticas y sociales radicalmente distintas: 45 años después de terminar la guerra resulta imposible justificar la confiscación general de los ahorros monetarios por una confluencia trágica de circunstancias históricas, y resulta aún más imposible convencer a la población de que semejante paso resulta imprescindible.

Si se decidiese realizar esta reforma, se tendría que tomar una decisión muy difícil: ¿a partir de qué nivel de ahorros se debería iniciar la confiscación mediante, por ejemplo, el cambio de la moneda nueva por la vieja en la proporción de 1:10? En la actualidad, el ahorro medio depositado en los bancos, aproximadamente 200 millones de cuentas, alcanza unos 1.500 rublos. Según los datos existentes, menos del 10 % de impositores poseen más del 40 % de la suma total de imposiciones, y esto representa, por lo visto, un máximo de 160-170.000 millones de rublos. Si establecemos el techo de ahorro socialmente aceptable en 1.500 rublos para efectuar el cambio de moneda en la proporción 1:1, convertiremos en objeto de confiscación precisamente a estos impositores «ricos» (que son muy pocos) y a los «medianos», al efectuar el cambio siguiendo el curso de confiscación, o sea en la proporción de 1:10, en todas las cuentas de ahorro que superen los 1.500 rublos. Esto proporcionaría al erario público un ingreso inmediato de más de 100.000 millones de rublos, pero una sola vez. Ya al año siguiente la suma de dinero no

materializado volvería a acumularse a ritmo acelerado, ya que la reforma mencionada no modifica los defectos básicos de la economía. Quizás el rublo funcionase un cierto tiempo; sin embargo, esta positiva reanimación sería, seguramente, muy breve, ya que el equilibrio alcanzado en el mercado de consumo sería artificial y no serviría de importante impulso para relanzar la producción de productos y servicios necesarios, de mayor calidad y menor coste. En cambio, esta operación quirúrgica enterraría definitivamente la confianza de la población en la política del Gobierno en general, así como en la *perestroika*; y después de esto durante toda una generación se podría hablar de reformas económicas radicales sólo utilizando el subjuntivo. Por este motivo la segunda variante, como la primera, resulta completamente irracional y, por tanto, no deseable.

Tercera variante: «Rescate» del dinero e inmovilización de los ahorros

En resumen, las dos líneas de política económica examinadas no son aceptables debido a la situación creada en el país y a las consecuencias políticas y sociales que ineludiblemente surgirán. La vía escogida para recuperar el equilibrio en el mercado y superar el déficit presupuestario debe no sólo dar resultados prácticos inmediatos, sino que además no debe resultar arriesgada política o socialmente, y en su variante óptima debe estimular el resurgimiento de la tranquilidad política y un espíritu normal «de trabajo» en todo el país, antes de acometer la tarea principal —el establecimiento de relaciones de mercado—. La única variante de actuaciones que resulta adecuada para este fin consiste en una intervención masiva del Estado en el mercado de productos para lograr estabilizar el rublo, lo que de hecho representa un «rescate» del «excedente monetario» estatal.

Esta operación debe realizarse fundamentalmente utilizando los precios internos de mercado —hecho que resultará ventajoso para el presupuesto estatal— y, acto seguido, retirando de la circulación y eliminando la parte fundamental de las ganancias monetarias. Esta operación será tanto más ventajosa cuanto más barata le resulte al Estado. Es evidente que dicho procedimiento no conseguirá sustraer todo el «excedente monetario», lo cual, además, podría resultar peligroso para el posterior funcionamiento del sistema financiero; por ello parte de este dinero deberá ser inmovilizado, utilizándolo para la adquisición de diferentes activos a largo plazo, cosa que, por otra parte, sería una acción previsor, ya que marcaría el inicio del «funcionamiento» de los rublos «cautivos». ¿Qué posibilidades tenemos en este camino?

En la actualidad, la población y las empresas tienen

acumulados (los ahorros del «calcetín» incluidos) de 250 a 300.000 millones de rublos «calientes», dispuestos a lanzarse al mercado para comprar productos necesarios o, sencillamente, los que se encuentren. Existen además aproximadamente 350.000 millones de rublos de «capital» no realizado, o sea acumulaciones destinadas a inversiones en activos industriales o financieros, que están esperando la posible inversión inmobiliaria, etc. Lo uno y lo otro son poderosos factores de inestabilidad del mercado, que hacen imprevisible la situación del mismo.

En este sentido, el «dinero caliente» resulta aún más peligroso, ya que su existencia determina en mayor parte el comportamiento social de la masa de consumidores y, por tanto, la situación real en el mercado de consumo.

Resulta posible «rescatar» (o materializar) el «dinero caliente» e invertir el «capital» recurriendo a fuentes internas y externas. Presentamos las más consistentes de ellas, cuya utilización incluso hoy resulta suficiente para calmar la fiebre compradora y estabilizar la relación monetario-mercantil.

FUENTES INTERNAS. 1. Es imprescindible crear un régimen que estimule y privilegie al máximo a las cooperativas que producen mercancías y servicios. En este caso, el sector cooperativista podría cubrir con creces el incremento en los ingresos monetarios de la población (si se mantiene el ritmo actual), y el incremento de la producción estatal de productos de consumo (40-50.000 millones de rublos) podría destinarse, junto con el impuesto sobre el tráfico de empresas, a reabsorber las acumulaciones monetarias de la población.

2. Vender (o arrendar a perpetuidad) parcelas de tierra a los habitantes de las ciudades, vender a la población los pisos estatales (pero conservando la gestión estatal de los servicios de mantenimiento), vender los stocks excedentes de materiales, el utillaje y la maquinaria no instalados, a la población urbana, a los granjeros y cooperativas. Todo esto podría convertirse en inversiones de capital y, al mismo tiempo, eliminar gran parte del «dinero caliente».

3. Sería muy provechosa la emisión de empréstitos mercantiles para la construcción de viviendas cooperativas o segundas residencias, para la adquisición —a plazos fijos— de automóviles, muebles, videotécnica, computadoras personales, lavadoras, congeladores y demás productos escasos de gran demanda. Una emisión de préstamos sin interés, destinada a la construcción complementaria de viviendas para 2-3 millones de familias durante 5 años y a la creación de nuevas fábricas de automóviles, que producirán 2 millones de coches a mediados de los años 90 y cuya venta se garantizaría a los acreedores de hoy. Si todo ello se organizara

racionalmente se podría sustraer de la circulación hasta 150.000 millones de rublos.

4. La emisión por el Estado de valores rentables (empréstitos) con plazos de 30 días a 30 años, siempre que los intereses de los mismos estén 2 puntos por encima del crecimiento de la inflación (ayer era el 8 % anual, hoy, por lo visto no sería inferior al 14-15 % y mañana podría ya sobrepasar el 20 %; esto quiere decir que los intereses no deben ser fijos); el mismo nivel de interés, o muy semejante, debe fijarse para las imposiciones a plazo fijo de la población; la población debe poder adquirir libremente acciones y obligaciones de empresas de nueva creación o ya existentes.

5. Organizar para las empresas subastas de los medios y materiales de producción (incluidos los de importación) sin límites en el precio, canalizando hacia el presupuesto estatal parte de los beneficios obtenidos para ser posteriormente esterilizados; un carácter análogo podrían desempeñar también las subastas en divisas para las empresas y particulares a precios libres de mercado (esta medida, además de golpear el mercado negro de divisas, ayudaría a sustraer el excedente monetario de la circulación bancaria).

6. Reducir temporalmente la exportación de productos de consumo de elevada incidencia en los presupuestos (ante todo automóviles) que no desempeñan un papel decisivo en los ingresos de divisas para el país, pero juegan un papel importante en el abastecimiento del mercado interior de consumo. Podemos anticiparnos a una objeción previsible: ahora es importante cualquier divisa, ¿de qué otro modo podemos obtenerla? Pero también sería ingenuo pensar que podemos empezar a construir una nueva economía sin medios de transporte individual más o menos modernos; en cambio nosotros tenemos esta producción reducida al mínimo.

7. Y, por fin, el último punto, pero no por su importancia: normalizar el comercio de bebidas alcohólicas. La normalización del comercio estatal de bebidas alcohólicas permitirá, ante todo, eliminar del mercado a los fabricantes clandestinos en cuyas manos se concentra, por lo menos, la mitad del comercio de alcohol en el país, y que además no pagan ni un céntimo de impuestos. En segundo lugar, este «sector clandestino» se ha convertido en un poderoso factor de especulación, desajuste del mercado y del crimen organizado, y no hay otro medio de vencerlo más que con la normalización del comercio de destilados y vinos. La campaña antialcohólica sólo ha conseguido que el presupuesto estatal deje de ingresar miles de millones de rublos, y que, por añadidura, haya aumentado el gasto en divisas que supone la compra adicional de más de un millón de toneladas de azúcar cubano con el único fin de abastecer a la mafia del alcohol; es irrisorio suponer que

se puede liquidar este rentable negocio clandestino implantando el racionamiento. Finalmente, aunque pueda resultar paradójico, en este momento normalizar la venta de vodka significa preocuparse por la salud de la población que se envenena con colonias, lociones, cerveza de baja calidad y alcohol casero, engrosando de este modo el ejército de toxicómanos a ritmo acelerado. Lo malo es que en las condiciones de la economía devastada y la elevada adicción al alcohol semiprohibido que se ha desarrollado en una gran parte de la población como resultado de los 5 años de bárbara «campaña antialcohólica», el nivel «normal» de su consumo anual puede ser superior que en 1985. Sin embargo, será, seguramente, necesario aceptar este hecho —hasta que se equilibre la demanda— y así evitar males aún mayores.

Seguramente, si se hubieran empezado a aplicar tan sólo algunas de las medidas mencionadas no más tarde del verano de 1990, se hubiera podido mantener parcialmente el mercado interno y reducir el déficit presupuestario previsto. Sin embargo, la posibilidad de obtener un resultado inmediato (lo único que se necesita ahora) se ha esfumado, como muchas otras buenas intenciones e iniciativas, «gracias» a la ineficacia del aparato burocrático de nuestro enorme país y a las interminables discusiones sobre el hecho de saber si determinadas medidas prácticas eran «ideológicamente aceptables». Y lo que ya se había iniciado (por ejemplo, la venta de certificados mercantiles «para el futuro» o nuevos tipos de valores) se hizo de tal modo que ha producido un efecto insignificante.

Hoy el pánico y la enorme tensión reinantes en el mercado interior, que ya se podían prever hace más de un año, han alcanzado tal dimensión que, seguramente, sólo tres instrumentos económicamente naturales y rápidos para actuar sobre el dinero «caliente» pueden iniciar la inmediata estabilización del mercado: el incremento del sector cooperativista, la comercialización estatal de bebidas alcohólicas y una drástica subida en las importaciones de productos de consumo. Todos estos instrumentos, aún hoy, siguen siendo problemáticos, a pesar de la ya inminente y clara amenaza financiera —los dos primeros, por motivos políticos e ideológicos, y el tercero, por motivos políticos y económicos.

FUENTES EXTERNAS. La particularidad de la política existente en nuestro país sobre la formación de precios se manifiesta, entre otras cosas, en que, calculado en precios mundiales, el coste de todo el problema de nuestro «dinero caliente» y de la estabilización del mercado de consumo representa una suma bastante moderada, por no decir pequeña: con la actual incidencia del consumo en el presupuesto, no supera los 20-25.000 millones de dólares. En una situación relativamente

normal este procedimiento resultaría el más barato para «rescatar» el excedente monetario de la población y, además, todos los implicados podrían quedar satisfechos con los resultados de la operación. No es descartable que también en los años siguientes se pudiera utilizar el efecto estabilizador de la importación de productos de amplio consumo para regular el mercado interior, lo que serviría, además, como factor de competitividad, que estimularía el funcionamiento de la industria nacional —para esto, seguramente, serían suficientes 3-5.000 millones de dólares anuales—. ¿Es posible este objetivo? Hace un año o año y medio se podría haber contestado afirmativamente, porque la importación total en divisas fuertes representaba no más de 31.000 millones de dólares al año.

Pero, al parecer, también en este campo se han dejado escapar muchas oportunidades, plenamente realizables hasta hace poco.

Está claro que para conseguir una movilización rápida, casi instantánea, de divisas fuertes en las cantidades indicadas y con destino determinado, necesitaríamos o una drástica reestructuración de todas nuestras importaciones o encontrar nuevas fuentes de divisas, aunque fuesen temporales; en realidad se necesitarían ambas cosas. Si somos realistas, veremos que ya no queda tiempo para estas operaciones y que, aquí también, se han dejado escapar muchas oportunidades. La inestabilidad política, los conflictos nacionalistas, la incapacidad de utilizar racionalmente lo recibido, los constantes vaivenes en la legislación relativa a las divisas, el crecimiento como una bola de nieve de la necesidad de importar lo que hace poco aún se podía obtener con relativa facilidad en el mercado interior y, por fin —y como consecuencia de todo esto—, la firme declaración de muchas repúblicas del deseo de disponer por lo menos de gran parte de «sus» ganancias en divisas, todo ello ha dado como resultado que ahora, por ejemplo, los bancos occidentales privados nos consideran prestatarios poco fiables y consecuentemente elevan, como siempre en estos casos, los intereses hasta el 16-18 %, lo que significa que los préstamos a medio y largo plazo en estos bancos resultan económicamente desaconsejables.

¿Existen, en tal caso, algunas posibilidades con las que se pueda contar? Parece que sí y, con la debida valentía y agilidad, podrían utilizarse muy racionalmente ya en los próximos meses.

En primer lugar, se trata de nuestras reservas de oro, que, por lo visto, aún son substanciosas (aunque la cantidad se considera información secreta). Es imposible proceder a su venta, ya que el resultado sería el hundimiento del mercado mundial del oro (y consecuentemente, el efecto inmediato para nosotros sería el contrario al deseado). Pero, ofreciéndolo como garan-

tía, se podrían obtener préstamos de 5 o 10.000 millones de dólares, como hicieron no hace mucho, por ejemplo, Italia y Portugal.

En segundo lugar, se podría disminuir considerablemente la ayuda que prestamos, sobre todo a los «terceros países»: la mayor parte de esta ayuda, que llega a los 10.000 millones de rublos anuales, se materializa en dólares, y podríamos reservarnos estas sumas de divisas fuertes, dejando a un lado (aunque fuese temporalmente) los habituales prejuicios e ideas al respecto, dado que en el momento actual ya no podemos soportar estos gastos.

En tercer lugar, se debe considerar erróneo el cierre de la red de establecimientos *Beriozka* que vendía a la población productos deficitarios por divisas que habían ganado en el extranjero. Desterrando los más vulgares prejuicios ideológicos, que determinaron en su momento esta acción, y reabriendo los establecimientos, podríamos llevar a las arcas del Estado varios centenares de millones de dólares, que tanto necesitamos actualmente. A propósito, tampoco se puede encontrar ninguna explicación racional a la actual práctica de abrir cuentas en divisas para ciudadanos soviéticos, sometiéndolas a muchas limitaciones para ingresar y gastar dichas divisas; los intereses en las cuentas son puramente simbólicos, se forman enormes colas en las cajas, se exige que se demuestre la procedencia de los ingresos; todo esto priva al Estado de centenares de millones (y, quizás, miles de millones) de dólares, contrariamente a toda razón y necesidades de beneficios, pero para satisfacción de los burócratas del aparato y los guardianes de una ideología ya caduca.

Se podrían obtener también algunas cantidades de divisas si se diese libertad a los extranjeros para la adquisición de tierras, casas, oficinas y empresas industriales y comerciales. Sin embargo, para esto se precisa una legislación adecuada (que, además, reforzaría en el extranjero nuestra debilitada reputación en el mundo de los negocios).

Y por fin, existe aún otra posibilidad potencial que podría convertirse en fuente inmediata de considerables ingresos de divisas: se trata de la ayuda oficial por parte de los gobiernos occidentales más predispuestos hacia nosotros, o a través de organizaciones internacionales. Es difícil entrar en detalles, sólo se puede subrayar que últimamente se ha roto el hielo y que la idea de un segundo «plan Marshall» para Europa Oriental no sólo es objeto de discusión en Occidente, sino que encuentra comprensión y apoyo en esferas oficiales muy elevadas.

Además, se puede recurrir a una serie de medidas capaces de proporcionar un aumento, no inmediato pero estable, de entrada de divisas en cantidades apreciables:

- se debe estimular abiertamente la exportación (y no bloquearla, como en realidad está sucediendo ahora), sobre todo, de lo que nosotros no necesitamos o no seremos capaces de utilizar racionalmente en el próximo decenio; para esto se debe simplificar al máximo la política referente a las licencias de exportación y crear una decena, o más, de consorcios;

- también existen unas determinadas reservas en la futura aceptación de los precios mundiales y la realización de las cuentas en divisas estables en nuestro comercio con los países del CAME (Consejo de Asistencia Económica Mutua);

- se puede cambiar parte de nuestras deudas en divisas libres por acciones de empresas soviéticas privatizadas;

- parte de la suma en muchos miles de millones de lo que nos deben otros países, cuyo cobro resulta muy problemático, se podría negociar en los mercados financieros mundiales a precios muy inferiores al nominal de la deuda;

- existen grandes posibilidades en las inversiones extranjeras en nuestro país, siempre que se realicen en condiciones comúnmente aceptadas.

Si se realizasen sólo parte de las posibilidades mencionadas (y hay más), no sería muy difícil obtener en un año o año y medio los 20-25.000 millones de dólares, que nos son tan necesarios.

Los detractores de tales medidas afirman que éstas no darán resultado en nuestro país y que las inyecciones de divisas e importaciones serán simplemente «tragadas», como sucedió con los muchos miles de millones de petrodólares en los últimos años. Evidentemente, pueden tener razón, y así sucederá si estas importaciones no se convierten en la fase inicial del movimiento hacia la economía de mercado, en un elemento insertado en toda la estrategia para adoptar decididamente las relaciones de mercado. Está claro que todas las operaciones de importación deben coordinarse con otras medidas de la reforma del mercado. Ni decir tiene que los beneficios de estas operaciones deben destinarse en primer lugar a reducir drásticamente el déficit presupuestario y a detener la emisión de dinero «vacío». Una condición indispensable para el éxito pueden ser las garantías en la organización de estas importaciones masivas: teniendo en cuenta la agitación consumidora actual y el desenfreno de la economía «sumergida», se deberá crear un organismo gubernamental especial (temporal) para realizar estas adquisiciones extraordinarias y hacer llegar los productos al consumidor.

* * *

Es evidente que de las tres variantes mencionadas la

última es la menos peligrosa, la más rápida y la menos dolorosa. Y a pesar de todo, resulta poco probable que se utilice precisamente esta vía para estabilizar el mercado interior y evitar su pleno desmoronamiento. Lamentablemente, tanto la experiencia histórica como la práctica semiespontánea de los últimos meses y la intuición indican que nos acercamos (aunque cada vez con menos oportunidades para ello) a la segunda vía. Esto vendría a significar que, también en el futuro, habrá que seguir la misma variante: confiscación parcial de los ahorros de la población y de las reservas monetarias de las empresas, combinada con un duro racionamiento de alimentos y productos de amplio consumo. Y esto, sin hablar del gran coste social y político que supone, representa un enorme retroceso, sobre todo si tenemos en cuenta la meta que nos hemos propuesto: la economía de mercado regulado.

Sin embargo, también son posibles diferentes combinaciones entre algunos componentes de la segunda y la tercera variante, pero es dudoso que, con paliativos, se pueda alcanzar con rapidez y éxito el resultado deseado, y amortiguar el coste que inevitablemente acompaña a la segunda variante. ¿Existe entonces alguna posibilidad de evitar estos costes brutales?

Nuestras divergencias

Para poder hablar de los costes de una política estabilizadora es preciso subrayar lo siguiente: todo lo que se ha dicho hasta ahora es la primera de las premisas para la transición hacia la economía de mercado; es la primera e ineludible, pero sólo es una de ellas. En nuestra opinión, para que el camino hacia la economía de mercado sea lo más «suave» posible y transcurra realmente con firmeza y sin grandes obstáculos, resultan imprescindibles dos premisas más: en primer lugar, es necesario en los mismos inicios ofrecer a la población mejoras visibles en algunos aspectos vitales o, por lo menos, crear expectativas reales de estas próximas mejoras; en segundo lugar, hay que realizar en todo el país la desmonopolización en todas las esferas, crear condiciones para la competencia y la aparición de agentes de mercado, y formar una infraestructura de mercado, aunque sea primitiva, teniendo en cuenta (lo subrayamos una vez más) que todo esto debe realizarse antes de estructurar las relaciones mercantiles propiamente dichas y no durante el proceso de creación de la economía de mercado.

Se comprende que la postura adoptada ante estas tres importantísimas premisas que están relacionadas entre sí determina toda la estrategia del proceso de transición hacia la economía de mercado. Seguramente,

en la actualidad, nadie conoce con exactitud todos los detalles de la transición hacia una economía nueva en nuestro país, lo cual tampoco resulta posible ni siquiera necesario: el propio mercado, en cuanto empiece a desarrollarse, irá indicando los detalles e introducirá las correcciones necesarias, ya que la creación de esta nueva economía debe ser un proceso libre de toda interferencia ideológica, y su desarrollo quedará determinado por centenares de miles y millones de particularidades —económicas, geográficas, sociales y nacionales— que, evidentemente, no pueden someterse a un cálculo racional.

Pero al mismo tiempo se puede y se debe prever el principal enfoque que se dará al proceso y planificar las acciones en las principales esferas de la economía y la vida en general, de modo que sean capaces de crear las condiciones óptimas para llegar a la economía de mercado.

El avance hacia la misma debe abarcar prácticamente todos los aspectos de la vida, y es imposible examinarlos todos, ni siquiera enumerarlos. Seguramente tampoco hay ninguna necesidad de hacerlo, porque el mayor interés radica en otra cosa: ¿coinciden las opiniones de los especialistas y de la población en las particularidades de la reforma que debemos emprender? Y, si no, ¿en qué consisten las principales divergencias y cómo se puede alcanzar el imprescindible consenso? Este último punto tiene una especial importancia para nosotros ya que es la garantía de éxito de toda la reforma, pues únicamente con el apoyo de toda la sociedad se puede realizar una transformación socioeconómica de semejantes dimensiones, con todas sus inevitables y crueles consecuencias. Por consiguiente, para que toda la estrategia de la transformación radical de la economía no se venga abajo ya en la primera etapa, la población debe obtener un respiro en los inicios del proceso y unas garantías visibles respecto a la racionalidad y utilidad de lo que se emprende. Precisamente la falta de este apoyo consensuado de la población hace imposible en nuestro país la versión «de choque» polaca en la transición a la economía de mercado.

En la prensa de los últimos meses no han faltado las más variadas y dispares propuestas y recomendaciones para sacar a nuestra economía de la crisis. A finales de mayo de 1990 el Gobierno central presentó su plan para la transición hacia la economía de mercado. Este proyecto no prosperó ante todo porque hacía un especial hincapié en las propuestas fiscales mientras quedaban relegadas a un segundo plano la reforma monetaria, el restablecimiento del valor del rublo y del equilibrio en el mercado de consumo, así como la creación de condiciones reales para la competencia. Prácticamente no se proponía ninguna medida para atraer recursos exteriores. En conjunto el proyecto gubernamental

mental llevaba el sello de tradiciones ideológicas ya desfasadas para entonces, y por este motivo el programa resultaba incompleto y débil.

Al ponerse de manifiesto la reacción negativa de toda la sociedad ante este proyecto, el Consejo de Ministros de la URSS creó una comisión de expertos para el examen de variantes alternativas del proyecto de transición a la economía de mercado. El análisis de los más de 80 proyectos y propuestas, presentados a la Comisión, mostró notables diferencias de éstos no sólo entre sí, sino sobre todo con el proyecto gubernamental, tanto por el enfoque general del problema, como en puntos concretos del proceso de transición. La mayoría de los proyectos alternativos estudiados tenían un carácter más «humano» y social que la concepción oficial y ante todo preveían una rápida y visible mejora en las condiciones de vida de los soviéticos. La mayor parte de los proyectos presentados daba prioridad precisamente a los problemas monetario-financieros y al restablecimiento del equilibrio en el mercado. Y, por último, una diferencia substancial entre estos proyectos y el gubernamental consistía en que la mayoría de ellos ponía el acento en la necesidad de crear en la economía del país una situación de predominio de la oferta sobre la demanda, como condición fundamental para el desarrollo de la competitividad, o sea el desarrollo del propio mercado. El factor externo era considerado en estos proyectos como muy importante y fundamental, sobre todo en la primera etapa, la más peligrosa y «delicada». La mayoría de proyectos destacaba la necesidad de acelerar drásticamente el ritmo de las reformas más urgentes y de reforzar su carácter radical y pragmático. El pensamiento ideológico tradicional conserva su importancia sólo en un aspecto: en la necesidad de medidas radicales para defender a la población de las consecuencias socialmente negativas que inevitablemente se producirían en algunas esferas, intentando compensarlas, en lo posible, en otros aspectos de la vida.

Lo más importante consistía en que la mayoría de proyectos alternativos preveía, en mayor o menor medida, la necesidad de crear en la población la motivación necesaria para un trabajo más productivo, y a través de esto llegar a una economía más rentable, orientada hacia una creciente producción de mercancías y servicios más baratos y de mayor calidad.

A pesar de todas las diferencias, que a veces eran fundamentales, entre el proyecto gubernamental y los alternativos —en el enfoque de la reforma económica, en prioridades y dinamismo y en el «modo» de resolver los problemas planteados—, el análisis de todos estos materiales demuestra que era posible elaborar una «variante sintética» para la transición hacia la economía de mercado que recogiese todo lo mejor del proyecto gu-

bernamental y de los proyectos alternativos. El alcance de este proyecto mixto se hubiese manifestado no sólo en la posibilidad de escoger las medidas y métodos más racionales, sino, y esto es lo principal, en que el trabajo sobre este proyecto hubiese proporcionado la base para alcanzar un determinado consenso entre todas las fuerzas renovadoras sobre una plataforma de centroizquierda, ese consenso aún no logrado que reclaman cada día con mayor fuerza los líderes de las tendencias de izquierda del país. Por consiguiente, un proyecto unificado de reforma podría ser la premisa política necesaria para coordinar las acciones tanto de los distintos movimientos, como de las repúblicas, con el poder central sobre una base común —la formación de un mercado único interregional que abarcase todo el país.

Es evidente que para elaborar este «proyecto de síntesis» deben superarse las principales diferencias entre el proyecto gubernamental y el punto de vista de numerosos economistas no gubernamentales, que están fundamentalmente reflejados en los proyectos alternativos. Nos parece racional examinar aquí, ante todo, los puntos fundamentales de estas diferencias. Con ello se pondrá de manifiesto, entre otras cosas, por qué en cada caso la elección debe hacerse a favor de la variante más radical, más decidida, teniendo en cuenta, naturalmente, las condiciones y posibilidades reales del país y no perdiendo nunca de vista la necesidad de mantener el máximo de estabilidad social. Estos «puntos de divergencia» son los siguientes.

Estructura de la propiedad

El proyecto gubernamental reconoce la diversidad de regímenes económicos en el país y el derecho de existir en igualdad de condiciones para cinco formas de propiedad: la estatal clásica, la de sociedades por acciones, la cooperativa, la pequeña familiar y la extranjera. La mayoría de los proyectos alternativos proponen una sexta forma de propiedad —la privada, con la utilización de mano de obra asalariada (tal vez limitada por el número de asalariados)—. Algunos pasos dados por el Gobierno dejan lugar a la esperanza de que esta divergencia se pueda superar y se forme la base real para el desarrollo de todas las formas de iniciativa privada en nuestra economía.

Sin embargo, queda aún por decidir un problema de primera magnitud: la propiedad privada sobre la tierra. Los proyectos más radicales reconocen que la propiedad privada sobre la tierra es un derecho constitucional inalienable de cada ciudadano. Y presentan un importante argumento: los campesinos y los que desean convertirse en campesinos nunca tendrán fe en el sistema arrendatario, pero sí creerán en la propiedad plena defendida por las leyes, que permita disponer libremente de la

tierra. Esto quiere decir que sólo si se realiza esta condición será posible el resurgimiento de la agricultura del país, sobre todo en las regiones más deprimidas.

Desmontaje del sistema dirigista, privatización de la propiedad estatal, abolición del monopolio, desarrollo de la competencia y creación de la infraestructura de mercado

En este punto las principales divergencias se encuentran en el ritmo, plazos y firmeza en la aplicación de las reformas previstas. Los proyectos alternativos proponen abolir los ministerios sectoriales ya en 1991, disminuir de manera drástica las funciones del Gosplan (Organismo Estatal de Planificación) y concentrar su actividad en la elaboración de programas estatales estratégicos y la realización de una política de regulación económica indirecta. Consecuentemente se tendrá que limitar el sistema de encargos estatales y las funciones del Organismo Estatal de Abastecimiento.

En las propuestas alternativas se presta gran atención a la creación de la Dirección del patrimonio estatal y a la rápida estimación real de los principales fondos del sector estatal, tanto en la esfera productiva como en la no productiva. Hay que vender las acciones de las empresas desestatalizadas a todas las personas físicas y jurídicas; por otra parte, las pequeñas y medianas empresas estatales, así como los koljoses improductivos, deben ser vendidos en su totalidad a los trabajadores, cooperativas, personas privadas o inversores extranjeros.

En lo que se refiere a la infraestructura de mercado, además de los plazos de aplicación de las principales reformas, la diferencia esencial entre los planes alternativos y el gubernamental se refiere al futuro estatus del Banco Estatal de la URSS: se propone que sea plenamente independiente del Gobierno sometiéndose sólo al Soviet Supremo de la URSS; algunos proyectos defienden la idea de reformar el sistema del Banco Estatal asemejándolo a la estructura de la Reserva Federal en el sistema norteamericano, con el propósito de que los bancos republicanos independientes formen un Banco Central de la URSS bajo la administración de un Consejo de Directores común.

Restauración del equilibrio en el mercado de consumo y del valor adquisitivo del rublo

En el proyecto gubernamental se refleja una vez más la infravaloración de la importancia y gravedad sociopolítica de este problema. En lo que se refiere a la «inmovilización» de los ahorros de la población y las empresas, la coincidencia entre los distintos proyectos es bastante amplia. Es verdad que los proyectos alter-

nativos proponen además la venta o arrendamiento a largo plazo de la tierra a los habitantes de las ciudades y a extranjeros, así como la venta en subastas de stocks industriales excedentes cuyo valor (en precios de mediados de 1990) se eleva a 200.000 millones de rublos (existen estimaciones aún mayores).

El proyecto gubernamental no prevé prácticamente ninguna acción especial contra el dinero «caliente»; sólo queda por subrayar que ni una sola de las alternativas presentadas contempla la reforma monetaria con confiscaciones, sobre todo porque la aplicación plena de esta reforma sería inadmisibles por razones sociales (y una reforma limitada no reportaría ningún provecho práctico).

Formación y reforma de los precios

En el problema del sistema de precios es donde se presenta más difícil el compromiso entre la variante gubernamental y la alternativa. La esencia del proyecto gubernamental es abiertamente fiscalizadora: confiscar a la población 65.000 millones de rublos y, con ello, cubrir una importante parte del déficit presupuestario. La decisión del Estado, plenamente justificada, de liquidar las desproporciones en los precios (verdaderamente escandalosas) se pretende alcanzar mediante la subida generalizada de los mismos, incluyendo las mercancías en cuyo precio pesa mucho la parte correspondiente al impuesto sobre empresas. Sin embargo, es justamente este impuesto el principal factor distorsionante en nuestro sistema de precios, con lo cual la operación que el Gobierno propone sólo acentuará esta desproporción. El resultado fiscal alcanzado será ilusorio y muy breve, y al concluir esta operación masiva de autoengaño financiero —tanto para la población, como para el presupuesto estatal— llegarán tiempos aún más sombríos. El resultado será el mismo en el caso de conservar, como propone el Gobierno, un fuerte control estatal sobre el 85 % de los precios, dejando el 15 % restante a la libre formación en el mercado. La reacción de la población a esta parte del proyecto gubernamental, aún no aplicado, ha sido verdaderamente demoledora. Ha demostrado que la sociedad, con toda legitimidad, rechaza cualquier medida de esta naturaleza y que, en el caso de que esta medida fuese impuesta desde «arriba», se podría esperar un estallido social de las más amplias dimensiones.

De las propuestas alternativas en esta área, dos son las que merecen mayor atención. Una de ellas parte de la idea de que conviene elevar los precios injustificablemente bajos y, al mismo tiempo, rebajar los precios artificialmente elevados. Como resultado pueden desaparecer dos monstruosos fenómenos —las subvenciones a los precios y el injustificable impuesto sobre la pro-

ducción (en principio, son cantidades casi iguales)—. Resulta complicado aplicar estas medidas de una sola vez, teniendo en cuenta además que algunos productos deben seguir pagando el impuesto estatal —tabaco, alcohol, metales preciosos, etc.—. Esta doble operación no proporcionará ningún ingreso al presupuesto del Estado, pero todos los precios (con muy pocas excepciones) deben pasar a formarse en el mercado. Si estas acciones se ven reforzadas con masivas inyecciones de mercancías en el mercado de consumo, se puede esperar que la población del país aceptará y apoyará la reforma de los precios.

El segundo enfoque alternativo se podría considerar como una versión muy suave de la terapia de choque. En esencia, propone que se garantice temporalmente a la población un nivel mínimo de consumo, mediante el racionamiento o manteniendo unos precios estables y artificialmente bajos. Los precios restantes se dejan en manos del comercio, o dicho de otra manera, al mercado libre. Los precios fijos, subvencionados por el Estado, deben existir sólo en la primera etapa de la reforma, la más dolorosa, mientras los ingresos de la población y las posibilidades del Estado para ayudar a los más desfavorecidos no crezcan lo suficiente como para poder transmitir al mercado libre («dejar libres») todos los precios sin excepción.

Ninguno de los proyectos alternativos contiene enfoques fiscales; las dos variantes avanzan hacia el sistema libre en la formación de precios con mucha mayor decisión que el proyecto oficial. Y lo más importante es que los dos proyectos alternativos subrayan que la situación creada en el país no permite iniciar la transición hacia el sistema de mercado a partir de la reforma (de hecho, el aumento) de los precios al por menor, tal como proponía el proyecto gubernamental, y, menos aún, utilizar la reforma como excusa para saquear una vez más a la población en beneficio de los presupuestos estatales.

Actividad económica exterior

En este apartado los proyectos alternativos contienen dos diferencias fundamentales con la propuesta gubernamental. En primer lugar, se trata del papel que debe desempeñar el sector exterior en la resolución del problema clave del equilibrio en el mercado, punto que ya hemos examinado. La gran mayoría de proyectos alternativos examinan e insisten en las inversiones extranjeras a largo plazo en nuestro país, realizadas bajo las formas más diversas: empresas mixtas, zonas francas, inversiones extranjeras directas en toda la producción civil, concesiones para la explotación de diversos recursos naturales.

Sin embargo, resulta evidente que para atraer masivamente el capital extranjero no basta con tener una

sólida base jurídica y política (y que aún no existe). Este proceso puede adquirir cierto desarrollo sólo si se resuelve, aunque sea parcialmente, el problema básico de la convertibilidad del rublo. Esto explica que el Gobierno haya rechazado el proyecto de transición hacia una moneda convertible mediante la creación de «dinero paralelo», tanto más cuanto de hecho éste ya ha penetrado en todos los poros de nuestra economía. El problema está en que se trata del dólar, y ningún país del mundo permite tan amplia convivencia en el mercado interior de la moneda nacional y monedas extranjeras. Existe el peligro de que mientras el rublo se hace convertible, el dólar pueda desbancarlo, mientras que una moneda paralela pero propia (rublo oro, boños: es igual) podría sanear nuestra actividad económica exterior y paulatinamente expulsar el rublo «enfermo», al ampliar la esfera de su acción. Con esto se aceleraría también la influencia de capital extranjero.

Política agraria

Es precisamente en el sector agrario, que despierta en nuestra sociedad los más enconados debates, donde el proyecto gubernamental mantiene una postura muy confusa e indecisa. En cambio los proyectos alternativos plantean una serie de propuestas radicales. Primero, suprimir por completo las subvenciones estatales a todos los koljoses y sovjoses plenamente deficitarios (que junto con los de baja rentabilidad pueden llegar al 60 %) y, por consiguiente, proceder a su autodisolución y transformación en otro tipo de explotaciones. Segundo, proclamar el derecho constitucional de cada campesino de salirse del koljós o sovjós con una parcela de tierra que se le asignará como propiedad privada; similares derechos sobre la tierra se deben adjudicar también a la población urbana. Tercero, se propone limitar los pedidos que hace el Estado a los koljoses y sovjoses a lo indispensable para garantizar la distribución racionada de alimentos a la población (si se escoge esta variante para el período transitorio) y para mantener las reservas estatales en productos alimenticios. El resto, incluyendo compras estatales, se debe dejar al mercado libre.

Cuarto, disolver todos los organismos de intervención administrativa directa en la agricultura y sustituirlos por organizaciones cooperativas o comerciales de ventas, abastecimiento, reparaciones, etc.; hay que reconvertir el Ministerio de Agricultura, transformándolo en un centro científico consultivo, que sólo oriente el desarrollo de la agricultura, pero no lo dirija.

Quinto, ampliar considerablemente el abastecimiento de maquinaria pequeña y tecnología agraria importada; el Estado debe elevar las inversiones centralizadas en la construcción de carreteras locales, además de esta-

blecer privilegios bancarios para la construcción rural.

Medidas de cobertura social

Tanto la mayoría de los proyectos alternativos, como el gubernamental, admiten claramente que la transición hacia la economía de mercado será dolorosa para la población. Sin embargo, las condiciones de esta transición deben suavizarse al máximo para evitar una explosión social y, lo que es aún más importante, para no desprestigiar ante la sociedad la propia idea de la economía de mercado antes de que se haga realidad. Las manifestaciones más dolorosas de este período serán, evidentemente, la elevación de los precios de todos los productos de consumo y el crecimiento del paro, porque el Estado dejará de mantener artificialmente a las empresas deficitarias y por la inevitable reestructuración en la economía de todo el país. Los proyectos alternativos proponen las siguientes líneas básicas en las ayudas sociales:

1. Abastecer los comercios con los productos necesarios, recurriendo a todos los medios, incluida la importación. Esta medida es muy efectiva, palpable inmediatamente. Además, la posibilidad de comprar tranquilamente justo lo que se necesita significaría por sí sola, en nuestras circunstancias, una mejora real en las condiciones de vida de la población soviética en 1,5-2 veces.

2. Racionar de manera temporal o establecer unos precios fijos subvencionados para un restringido círculo de productos puede resultar en la primera etapa una forma imprescindible, aunque en general no deseable, de ayuda social, sobre todo para las capas menos favorecidas.

3. Los ingresos proporcionados por la suspensión de las subvenciones estatales a los productos de consumo y por la subida de los precios de venta deben ser puntualmente revertidos a los consumidores, ante todo a los de bajo poder adquisitivo. Inmediatamente después de la reforma de los precios se debe establecer una permanente adecuación entre salarios y precios, y para los ahorros de la población hay que fijar un coeficiente compensatorio de una sola aplicación y realizar posteriormente sucesivas indicaciones en función del nivel de inflación.

4. La política fiscal del Estado ha de cambiar radicalmente y debe orientarse a posibilitar al máximo que la gente se gane la vida con el trabajo honrado, y no a limitar los salarios y beneficios. No tiene que existir ningún techo en los ingresos, y la progresión en los impuestos no debe obstaculizar el esfuerzo, la iniciativa ni la capacidad emprendedora de los ciudadanos.

5. Hay que dar prioridad a la lucha contra el de-

empleo estructural; ésta, sin embargo, debe encaminarse hacia la creación de nuevos puestos de trabajo y no hacia la conservación de empleos innecesarios. Para ello será necesario aumentar considerablemente las inversiones estatales en programas de reciclaje (muchas profesiones serán de nueva creación) y redistribución de la mano de obra liberada por los cambios estructurales. En relación con esto se tendrá que abolir también la legislación sobre la residencia obligatoria. En esta labor es importante aprovechar todas las posibilidades, incluidas las derivadas de las empresas cooperativas y privadas; en caso contrario no lograremos liberar rápidamente nuestra economía del enorme lastre de la ocupación laboral excedente, inútil (y, a veces, pernicioso), un fenómeno que alcanza hoy, según diversas estimaciones, de 30 a 40 millones de personas e introduce las correspondientes y nada positivas correcciones en los índices de efectividad de nuestra producción.

6. Es indiscutible que, en la transición hacia la economía de mercado, podrán mejorar el clima social una actividad más humana en la política social, el dar prioridad nacional a políticas como las ayudas a los ancianos, niños, estudiantes y minusválidos, el desarrollo de todas las formas de participación social, el estímulo a las instituciones caritativas y beneficencia social.

Centro, repúblicas y poderes locales

Resulta interesante que los proyectos alternativos subrayen lo siguiente: la principal cuestión económica de las relaciones entre el centro, las repúblicas y las regiones no es la división vertical de las competencias (que fácilmente puede convertirse en la variante modernizada del antiguo sistema administrativo dirigista de la economía), sino la independencia de las empresas, como sujetos principales de la actividad económica. La actividad de todas las empresas —por acciones, cooperativas, particulares, extranjeras— deben subordinarse sólo a las leyes y reglas del mercado y a ninguna otra estructura administrativa de alcance estatal, republicano u otro. En cuanto a las reglas de funcionamiento del mercado, éstas deben ser elaboradas en el transcurso de la preparación del nuevo convenio de la Unión. El Gobierno central debe renunciar a algunas de sus pretensiones como, por ejemplo, desempeñar un papel decisivo en la formación de los precios.

Dinero, presupuesto, déficit

Conviene destacar tres líneas más en las futuras transformaciones, tanto porque están muy relacionadas entre sí, como porque en la actualidad estas tres esferas,

más que cualquier otra, predeterminan el éxito de nuestro avance hacia la economía de mercado: son, en primer lugar, el sistema monetario-financiero; en segundo lugar, el presupuesto del Estado, y, en tercer lugar, la política de obras públicas y de inversiones a largo plazo del Estado.

Reestructuración del sistema monetario-financiero

En la actualidad un rublo fuerte y sano puede ser para la economía y sus perspectivas más importante que cualquier otro indicador (toneladas, kilowatios, kilómetros, etc.) del desarrollo económico, si es que éste llega algún día. El saneamiento del sistema financiero del país debe ser profundo, ya que medidas superficiales (aunque puedan parecer radicales) conducirán inevitablemente al resurgimiento de la situación anterior a la *perestroika*, pero en versión empeorada.

En este campo existe experiencia suficiente —tanto de los países desarrollados, con numerosos elementos positivos, como de la nuestra propia, fundamentalmente negativa—, así que no hay mucho de qué discutir. La reforma del sistema monetario y financiero debe basarse en dos principios. 1) rebajar al mínimo la redistribución centralizada de los recursos monetarios (principalmente a través del presupuesto del Estado), organizar su movimiento con predominio de la dirección «horizontal» a través del mercado crediticio; 2) cubrir todos los gastos de particulares, empresas y Estado, sólo mediante ingresos reales y ahorros, pero no imprimiendo más dinero.

El eslabón principal del sistema crediticio tienen que ser los bancos comerciales, que funcionan en régimen de autonomía financiera. La fuente principal de los fondos crediticios deben ser las imposiciones voluntarias de particulares y empresas en estos bancos, y no asignaciones presupuestarias, a las que se puede recurrir sólo para subvencionar programas y proyectos de carácter prioritario para el Estado. El crédito para inversiones debe canalizarse a través de una red de bancos inversionistas que se apoyan en los bancos comerciales depositarios y que recurren a los recursos estatales sólo cuando se necesita una financiación complementaria.

La actividad de todas las instituciones crediticias y financieras del país debe ser sometida a reglas unificadas, dictadas por el Banco Estatal de la URSS. Las funciones de este banco, como las del Banco Central, que no dependen del Ministerio de Finanzas y se subordinan directamente al Soviet Supremo de la URSS, deben incluir la emisión de dinero y la regulación de todo el sistema monetario y crediticio (y en primer lugar, el volumen del dinero en circulación), así como el control de las operaciones en divisas. En estas condiciones la política crediticia puede convertirse en un im-

portante y eficaz regulador de la política económica nacional.

Por ahora la política del Banco Estatal debería concentrarse en la dura limitación del crédito, lo que permitiría atacar las fuentes inflacionistas (es evidente que, como paso previo, habrá que sustraer una considerable parte del «excedente monetario» y crear en el país una situación de predominio de la oferta sobre la demanda). Entonces será posible también liberar los precios del control «desde arriba»: éstos reflejarán las proporciones de costes con mayor exactitud y operatividad que cualquier reforma o control administrativo sobre precios y salarios.

Las medidas relacionadas con las divisas también desempeñan un papel considerable en el saneamiento de las finanzas. A lo ya expuesto anteriormente, se tendría que añadir la necesidad de establecer una estrecha colaboración con organizaciones económicas internacionales —tales como la OCDE, el GATT, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo— con el posterior ingreso en todas estas organizaciones.

Y una observación más, muy importante cuando se trata de mejorar el funcionamiento de la esfera monetario-financiera en su totalidad: el perfeccionamiento en esta área resulta totalmente imposible sin una estadística completa y fiable, incluyendo los datos sobre la masa monetaria, pasivos del Banco Estatal de la URSS, ejecución del presupuesto estatal, índices de precios de venta al por mayor y detalle, índice del coste de vida, datos sobre las reservas de oro y divisas, balances comerciales y de pagos, deuda exterior e interior, etc.

Es evidente que no hemos enumerado más que una parte de las condiciones indispensables para el saneamiento financiero, pero sólo si éstas se realizan, tendrá éxito en nuestro país la *perestroika* económica, y el rublo finalmente empezará a funcionar.

Presupuestos estatales, impuestos, déficit presupuestario

En nuestro país la situación en el área financiera queda determinada principalmente por la política presupuestaria. Y esta política, a su vez, se caracteriza notablemente por la parte que el presupuesto del Estado representa en la renta nacional. En los últimos años esta parte ha crecido constantemente, y mientras en el año 1970, a través del presupuesto estatal, se redistribuía el 53 % de la renta nacional, en el año 1989 era ya el 76 %. Es evidente que esta situación se mantiene en los presupuestos para 1991, si se tiene en cuenta el conjunto de datos sobre el presupuesto de la Unión y los presupuestos de las repúblicas, a las que este año son transferidas muchas funciones y derechos presu-

puestarios. Esto quiere decir que, a pesar de todos los discursos sobre la reforma económica, autonomía financiera y transición hacia una economía de mercado, la dirección centralizada de la economía no decrece y que la independencia económica de las empresas en estas condiciones es pura ficción. Es más, en las condiciones actuales (la parte de renta nacional correspondiente a los presupuestos estatales, estructura de sus gastos e ingresos, los mecanismos de financiación presupuestaria, los medios para cubrir el déficit presupuestario y, por fin, el procedimiento de elaboración y aceptación de los presupuestos estatales) resulta no ya difícil, sino imposible luchar contra la inflación. Dadas las circunstancias, no cabe esperar una contribución positiva de los presupuestos a la reestructuración de los mecanismos económicos.

Lamentablemente, el proyecto de los presupuestos estatales para 1991 mantiene las mismas particularidades que caracterizaban en esta esfera al proyecto gubernamental para la transición hacia relaciones de mercado: los presupuestos son considerados por el Gobierno como una fotografía del estado de las finanzas estatales, con mayor o menor grado de exactitud y fiabilidad, y no como uno de los posibles y más potentes reguladores de la economía y un medio para estimular el crecimiento económico. El proyecto de los presupuestos para 1991, como todos los anteriores y como el proyecto de transición presentado por el Gobierno, centra toda su atención no tanto en las posibilidades de ampliar los ingresos presupuestarios como en la búsqueda de medios para disminuir los gastos (el aumento del gasto que se puede observar en muchas partidas no debe llevar a engaño, sobre todo porque tiene en cuenta la subida de los precios al por mayor y de las tarifas en un 60 %, aproximado, desde el 1 de enero de 1991).

Sin embargo, tampoco los proyectos alternativos para la transición hacia la economía de mercado aportan grandes novedades en sus partes dedicadas a los presupuestos. Parten, ante todo, de la afirmación que el déficit presupuestario debe ser superado casi plenamente en el año 1991 y debe cesar la emisión de papel moneda. Esto se ha de alcanzar aplicando una serie de medidas, tales como seguir la política de reducción de los gastos armamentísticos y los gastos burocráticos, reducir la ayuda al extranjero, suprimir o reducir considerablemente las subvenciones estatales a la industria y transporte, etc., recortar considerablemente el gasto previsto para las exploraciones geológicas, mejoramientos del terreno y todos los proyectos «del siglo», que son puramente de imagen. En todo lo expuesto la única diferencia entre los proyectos alternativos y el oficial consiste, quizás, en que las propuestas de los primeros son más radicales.

La política de recortes en los gastos presupuestarios daría lógicamente la posibilidad de rebajar también las partidas de ingresos. La simple disminución de los ingresos indispensables podría, en las condiciones actuales, relajar la tensión en el área de las finanzas estatales y liberar la acción de algunos factores estimulantes del desarrollo económico. Pero lo más importante no es esto. Sería posible modificar el principio mismo de obtención de recursos para la financiación de los gastos estatales adoptando el impuesto directo y progresivo sobre beneficios y ganancias personales como fuente principal de ingresos presupuestarios. A los impuestos indirectos, enmascarados, sólo se debe recurrir como medida auxiliar. No debemos olvidar que, por ejemplo, el impuesto sobre tráfico de empresas, que actualmente representa cerca de un cuarto del presupuesto anual (casi 120.000 millones de rublos), es para el Gobierno una fuente muy cómoda de ingresos, pero al mismo tiempo, por las particularidades de su utilización y recaudación en nuestro país, representa una colosal y permanente carga inflacionista. Para la economía podría resultar beneficioso incluso un desplazamiento parcial de este impuesto a favor de, por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido. Esta medida contribuirá a disminuir las distorsiones en los precios, que en nuestra economía soportan una carga injustificada de funciones redistributivas y, por ello, no reflejan las auténticas relaciones de costes.

La política tributaria del Gobierno es objeto de fuertes críticas en muchos de los proyectos alternativos para la transición a la economía de mercado. Por los mismos motivos se critica también la reforma de precios que propone el Gobierno —por su enfoque poco perspicaz, netamente fiscal, por su preocupación por obtener ventajas inmediatas y el completo olvido de las perspectivas financieras; es preciso abandonar la práctica de explotación a través de los impuestos y crear en el país una situación que contribuya al crecimiento de los ingresos, tanto de las empresas como de la población, y a través de esto también de los ingresos estatales.

Hace poco que ha sido aprobada la ley sobre impuestos de la población, pero la escala de aumento progresivo de la imposición, contenida en la misma, provoca las más enérgicas protestas, ya que en vez de estimular el trabajo consciente e innovador, estimula el robo generalizado. Idénticas objeciones despierta el sistema tributario para las cooperativas, granjeros y la iniciativa privada en general, así como para las profesiones liberales y los extranjeros. El nuevo sistema tributario empuja a las personas emprendedoras a la economía sumergida o detiene por completo su actividad e iniciativa. En tales condiciones no se puede esperar que el país inicie el movimiento hacia la economía de mercado no sólo desde arriba, sino también desde abajo.

Las mismas objeciones serias provoca el sistema de impuestos sobre los beneficios empresariales: el nuevo sistema prevé, de hecho, una doble carga de impuestos (teniendo en cuenta las elevadas deducciones para las necesidades sociales); el prohibitivo impuesto sobre cualquier tipo de superbeneficio, sin tener en cuenta si éste se ha obtenido por manipulación de los precios o bien como resultado de un nuevo procedimiento tecnológico o nuevas soluciones creativas; impuestos sobre todas las inversiones, incluyendo las de capital a largo plazo para la modernización tecnológica y reconstrucción. Los impuestos sobre los beneficios de nuestros socios extranjeros no atraen nuevos capitales sino que, al revés, los alejan. No hay explicación (como no sean las convulsivas tentativas de poner parches a los descosidos presupuestarios) para el propósito del Gobierno de sustraer para sí el 20 %, o más, de las amortizaciones, fenómeno no observado en la práctica mundial normal.

Con toda seguridad se puede afirmar que, si en nuestro avance hacia la economía de mercado no hubiese ninguna otra dificultad u obstáculo, el actual sistema impositivo sería capaz por sí solo de paralizar la reforma económica ya en su primera fase. Si no reformamos con la mayor urgencia nuestro sistema impositivo dando vía libre a todas las fuerzas creadoras y emprendedoras que aún existen en nuestra sociedad, la crisis económica seguirá avanzando.

Los empresarios pueden sentirse interesados en sus actividades sólo cuando el conjunto de impuestos empresariales no sobrepasa el 50 % de los beneficios, teniendo en cuenta que todas las partidas por amortizaciones deben quedar en la empresa. También es necesario determinar el nivel de presión fiscal máximo sobre los beneficios empresariales (de los impuestos a nivel federal, republicano y local) en todo el país, sin relación alguna con el área de su actividad. Los impuestos sobre las cooperativas, que se computan sobre los ingresos y no sobre los beneficios, deja sin sentido cualquier razonamiento sobre la igualdad de distintas formas de propiedad y sobre el papel activo de las cooperativas en el desarrollo de las relaciones de mercado. Pero partiendo de la igualdad inicial en el sistema impositivo para las distintas empresas (estatales, arrendadas, cooperativas o individuales), es posible recurrir a distintas ventajas impositivas como regulador eficaz para estimular el crecimiento económico.

Los ingresos personales de la población pueden convertirse en fuente de crecientes ingresos para el Estado, pero sólo en el caso de que aumente la parte del fondo salarial en la renta nacional. Actualmente, en la URSS, esta parte representa aproximadamente el 37 %; en cambio en los países desarrollados se sitúa en el 60-80 %. En concepto de diferentes impuestos la pobla-

ción paga el 72 % de sus ganancias y esto, como es natural, anula cualquier estímulo para el trabajo productivo.

Otra condición fundamental e imprescindible para el saneamiento de todo el sistema financiero del país consiste en limitar por ley la posibilidad de cubrir el déficit presupuestario estatal mediante la emisión de billetes. El déficit presupuestario dejará de ser por sí solo testimonio de la crisis económica únicamente cuando se cubra no con nuevas emisiones de dinero, sino mediante la venta a personas físicas y jurídicas de títulos del Estado, cuya adquisición será siempre voluntaria. La deuda estatal interna (más de 500.000 millones de rublos) también debe ser transferida a este tipo de papeles.

Y por fin, consideramos que son importantes algunas medidas de procedimiento y organización para que los presupuestos del Estado se conviertan en un eficaz mecanismo estimulador de la economía (que es lo que deben ser en condiciones normales). Es evidente que las causas de la crisis económica son profundas y variadas. Sin embargo, nadie duda de que muchos de los procesos negativos de la economía se podrían prever, prevenir o evitar si los procesos de redacción, aceptación y control sobre la ejecución del presupuesto estatal (o de la República) fuesen más meditados, racionales y objetivos. Esto adquiere especial importancia en el proceso de transición a las relaciones de mercado. En la actualidad la redacción del proyecto de presupuestos lo realiza un reducido número de instituciones, con la participación de un círculo muy limitado de especialistas, cuya ampliación, además, se retiene artificialmente. Las modificaciones, imprescindibles en la economía de mercado, casi no se dejan notar. Por lo poco que publica la prensa es casi imposible deducir el volumen de las futuras inversiones presupuestarias, las sumas destinadas a importantes programas estatales, su magnitud general, qué y en qué proporciones se financiará (o se pretende financiar) a través de los presupuestos republicanos, posibles alternativas a la distribución de los fondos presupuestarios, etc. Y lo más importante: ¿cuál es la concepción, el enfoque general del proyecto de presupuestos, qué metas y problemas se plantea el Gobierno y qué piensa ejecutar mediante los presupuestos estatales?

Para transformar los presupuestos estatales de una simple previsión de gastos e ingresos en un activo y dinámico mecanismo para el reforzamiento económico y la estructuración estatal, que aumente la riqueza del país y de su población, es completamente imprescindible ampliar, ya desde ahora, la información sobre los proyectos de los presupuestos y su ejecución, con detalles sobre los gastos no sólo desde el punto de vista funcional, sino también según programas e institucio-

nes; hay que discutir las posibles alternativas a la política presupuestaria, así como mostrar la progresión de gastos e ingresos sobre varios años, etc. En este sentido se daría un paso razonable y justificable si la elaboración de los proyectos presupuestarios pasara del Ministerio de Finanzas a un organismo especialmente creado para este fin y subordinado directamente al responsable del poder ejecutivo o del Estado. Es dudoso que se pueda hallar otro medio para que las acciones del organismo presupuestario sean realmente independientes y profesionales, única manera de garantizar la racionalidad tanto de los gastos estatales, como del sistema impositivo, en un auténtico estimulador del desarrollo económico.

Inversiones, obras públicas

No es casual que aquí (como en una serie de proyectos alternativos) se relacione el problema de las inversiones de capital estatales con los problemas monetarios y de presupuestos. La situación en las obras públicas que hasta ahora se han financiado casi por completo a través de los presupuestos generales es considerada como uno de los factores básicos en la desestabilización de la circulación monetaria y mercantil del país. Según algunos cálculos, hasta el 40 % de las obras iniciadas no pueden ser abastecidas en la medida necesaria de mano de obra, maquinaria, materiales y recursos. La prolongación de unas obras y la no finalización de otras se ha convertido en una auténtica maldición para toda la economía: cada año se gastan inútilmente miles de millones de rublos en recursos financieros y físicos, sin producir ningún reflujo y transformándose en un fuerte factor inflacionista. Una drástica disminución en el número de obras industriales, la congelación de las obras prolongadas ya iniciadas, una nueva orientación en la política para realizar obras sólo necesarias económicamente y la garantía de abastecerlas con materiales y maquinaria: todo ello permitiría reducir considerablemente la financiación deficitaria, y, por tanto, el déficit presupuestario, organizar el mercado mayorista de materiales de construcción y, al mismo tiempo, crear las condiciones para la transición hacia una nueva situación económica, en la que la mayoría de obras, exceptuando las más importantes, no tendrían financiación centralizada.

En este punto, los proyectos alternativos son mucho más radicales que el gubernamental. Proponen reducir los encargos estatales hasta el 15-20 % de las inversiones de capital, elevar considerablemente los intereses bancarios para créditos a largo plazo, iniciar la venta masiva de las obras sin terminar y de la maquinaria no instalada a cualquier persona física o jurídica, incluyendo a los extranjeros. Los cálculos indican que se podría

vender hasta la mitad de las obras sin terminar, lo que proporcionaría al Estado más de 100.000 millones de rublos. La redistribución de las antiguas asignaciones del Ministerio de Aguas, traspasándolas de las obras de bonificación de tierras y de enormes canales —que son económicamente ineficaces y perjudiciales desde el punto de vista ecológico— a la construcción de carreteras, no sólo aumentaría la rentabilidad de aproximadamente 10.000 millones de rublos del presupuesto estatal, sino que además daría miles de kilómetros de carreteras, tan necesarias en las regiones rurales. Por consiguiente, un enfoque adecuado de las inversiones a largo plazo puede, además de beneficiar al presupuesto general, convertirse en un factor dinámico y palpable de la profunda reestructuración de nuestra economía en favor del mercado de consumo.

Algunas reflexiones

Estas son algunas consideraciones, evidentemente incompletas y a veces simplemente fragmentarias, sobre la situación actual de la mayor acción de transformación económica que se ha dado en el mundo. Seguramente hubiese sido más interesante escribir sobre algunos resultados reales de nuestro avance hacia la economía de mercado o, por lo menos, sobre un plan concreto de transición, aceptado y asimilado por toda la sociedad como directriz unitaria para la acción. En los últimos meses (con gran retraso respecto a las exigencias temporales) se ha intentado en más de una ocasión elaborar un plan así. El primer gran intento de este tipo fue el programa gubernamental, dado a conocer a finales de mayo de 1990, que suscitó críticas inmediatas y severas por parte de la derecha y de la izquierda, ya que era un ejemplo de indecisión y de compromisos. El hecho de que no fuese aceptado por la sociedad se puede considerar, indiscutiblemente, como un fenómeno positivo; sin embargo, mientras tanto, la economía del país fue abandonada a su suerte. El aparato burocrático de administración dirigista empezó a desmoronarse, pero no existía ningún otro sistema de dirección económica capaz de tomar el relevo. La destrucción de las relaciones económicas, formadas durante decenios, fue una carga muy pesada para la economía y se vio muy agravada por los conflictos nacionalistas, el inicio de las «manifestaciones de soberanía» de las repúblicas, regiones, e incluso zonas, y por las acciones poco meditadas y a veces enigmáticas del Gobierno. La acelerada desintegración del mercado interior de consumo y de los sistemas monetario y financiero se ha convertido en una auténtica catástrofe.

La comisión para el estudio de proyectos alternativos

y el grupo creado posteriormente, en verano de 1990, para la elaboración del programa «500 días» trabajaron ya en este ambiente de nerviosismo. El estudio de los proyectos alternativos de la reforma ayudó mucho a comprender los procesos que se desarrollaban en el país y al análisis del estado de ánimo de la sociedad. El grupo «500 días» obtuvo en estos materiales un buen punto de referencia. El proyecto de transición a la economía de mercado, elaborado por este grupo y profesionalmente correcto, fue ruidosa y multitudinariamente aprobado; pero al poco tiempo fue sometido a tres transformaciones y, después del incomprensible y fracasado intento de combinarlo con el programa gubernamental, acabó casi olvidado con la misma rapidez.

El avance hacia la economía de mercado transcurre en nuestro país con dificultades muy superiores a lo que cabía esperar hace tan sólo un año. Hoy ya es evidente que no hubiese sido fácil ni siquiera en la coyuntura económica relativamente favorable del inicio del decenio; pero ahora el pueblo, desconcertado por las desgracias e injusticias que de modo aparentemente inesperado le han caído encima, simplemente no está preparado para aceptar el sistema de mercado, a pesar de que, según las encuestas sociales, la estable mayoría de la población se manifiesta a favor de las nuevas relaciones económicas.

La incapacidad de resolver problemas económicos complejos se ve agravada además por la falta de cultura política, que es el resultado de nuestro prolongado estancamiento en la vida social y política. Es difícil aprenderlo todo a la vez. Los consejos creados a diferentes niveles no consiguen ponerse de acuerdo entre sí, se desgarran en ambiciosas contradicciones, pierden tiempo en estériles e inoportunos debates sobre problemas de segundo orden y se revelan incapaces de utilizar el

poder recibido y, por lo visto, de hallar el eslabón principal.

Y mientras tanto el incendio en nuestra economía crece cada vez más. En el IV Congreso de los Diputados del Pueblo de la URSS, en diciembre de 1990, se dieron a conocer los poco halagüeños resultados económicos del país en el último año: la renta nacional descendió un 4 %, la productividad un 3 %, comparándolo tan sólo con el año anterior; se realizó una emisión de 24.000 millones de rublos; de nuevo aumentaron, a pesar de todas las decisiones adoptadas para su descenso, las obras no concluidas, sobrepasando en 25.000 millones de rublos lo establecido y con una disminución simultánea en la construcción de viviendas; la exportación bajó un 12 %; 30 millones de toneladas de cereales fueron importadas de nuevo en 1991; continúa la disgregación en las relaciones económicas.

Estas elocuentes cifras demuestran con toda claridad dos cosas: primero, al final del primer lustro de *perestroika*, el Gobierno aún no tiene un plan, aceptable y realizable, para la creación de la economía de mercado, pero es precisamente él quien debe, en definitiva, elaborar este plan; segundo, el Gobierno por ahora no está preparado para acciones decididas en este campo. Pero también hay que reconocer que cinco años no son muchos para apartarse de costumbres y tradiciones forjadas por tres generaciones.

Sólo un asomo tranquilizador emerge en todo esto: la decisión cada vez más evidente de distintas fuerzas sociales de consolidarse, dejando de lado temporalmente las divergencias políticas e ideológicas; la variante de «síntesis» del proyecto de transición a la economía de mercado aún es posible y, en nuestra opinión, la única realizable. Si convencemos a la gente de que tenga fe en el futuro, podremos quebrar la marcha de los acontecimientos. Los próximos meses dirán si lo logramos.